

«RIT»

Foja: 1

FOJA: 33 .- .-

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 17º Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-21726-2023  
CARATULADO : MEJÍAS/FISCO DE CHILE

Santiago, nueve de octubre de dos mil veinticuatro  
VISTOS:

Con fecha 28 de diciembre de 2023, a través de presentación ingresada por oficina judicial virtual, comparecen don **Hugo Gutiérrez Gálvez, Ramiro Ignacio Gutiérrez Acuña** y **Yolanda Berena Milanca Nahuelhuaique**, abogados, todos domiciliados en Paseo Bulnes 216 oficina 901, comuna de Santiago, en representación de don **Mario Mejías Huircán**, chileno, casado, comerciante, cédula nacional de identidad n°5.864.486-2, domiciliado en pasaje Real N° 2286, villa Concepción, población Lo Hermida, comuna de Peñalolén, Santiago, Región Metropolitana, quien deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra del **Fisco de Chile**, representado en su Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Raúl Letelier Wartenberg, abogado, ambos con domicilio en calle Agustinas 1225, piso 4º Comuna de Santiago.

Funda su demanda en los hechos que describe, en sus palabras , cuando el día 1 de mayo de 1987 se hicieron sentir las represalias en contra de su representado por su actuación ante el Papa donde pronunció un discurso.

Relata que a las 00:30 horas de aquella noche, unos seis individuos, rompen el candado de la reja de acceso al inmueble, y comienzan a intentar entrar a la casa de Mario, gritando que abrieran la puerta, pues era la policía. Nuestro mandante y su esposa, María Cristina Donoso Toledo, se levantaron y se comenzaron a vestir para atender los llamados, pero antes, los individuos lograron abrir la puerta de la casa e ingresaron, en silencio, al interior del hogar, armados, entrando hasta la pieza del matrimonio para informar al demandante que debía acompañarlos pues estaban investigando un atropello en el que estaba involucrado el furgón que estaba en el patio de la casa estacionado, de propiedad de Mario.

Expone que inmediatamente, una vez que partieron, hicieron que su mandante pusiera la cabeza entre las piernas y lo cubrieron con una chaqueta que llevaba él mismo. Estuvieron dando vueltas por varios sectores de la capital, mientras los pasajeros del vehículo en que viajaban se iban intercambiando. Se paraban en un punto, se bajaban dos individuos y se subían otros dos. Luego lo mismo. En un momento, el copiloto del vehículo se da vuelta y le atesta un golpe en la nariz que produjo hemorragia nasal al demandante mientras le espetaba su traición por lo que hizo ante el Papa. Siguió golpeándolo en varias ocasiones, muy agresivamente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NXUSXQSJQRK

Foja: 1

Luego de dar varias vueltas, se dirigen finalmente hasta un sitio eriaz, ubicado en Conchalí, en un sector denominado “El Barrero” como se enteraría después su mandante. Allí bajan a Mario Mejías del automóvil y se unen otros agentes a la actividad, logrando contar, dificultosamente, 10 individuos alrededor de él. Comenzaron a darle una paliza que bien pudo haberle costado la vida. Le deformaron la cara a patadas y golpes de puño. Estuvo mucho tiempo recibiendo golpes, mientras le gritaban que era un traidor por haber cambiado el discurso ante el Papa.

Al darse cuenta que ellos no iban a parar hasta matarlo, Mario decidió que simularía estar muerto para ver si con eso paraban de golpearlo, y así fue, dejó de moverse y respirar para simular estar muerto, y ellos pararon, procediendo a pisar los dedos de sus manos para asegurarse que no se moviera, lo que le trae consecuencias en sus dedos hasta el día de hoy. Mario aguantó estoico el dolor y no se movió, lo que permitió que los agentes secretos pararan la tortura y se retiraran, dejándolo en el suelo, aparentemente muerto.

A eso de las 4 am aproximadamente, Mario llega a su casa junto a su hermana, con su cara amoratada y su cuerpo maltrecho. Al verlo, su esposa se desmaya. A su vez, los vecinos y las monjas que acompañaron a María Donoso en la búsqueda de su esposo, lo ayudaron para llegar a la posta central a curar sus lesiones y hacer la constancia. Increíblemente, y a pesar de los reclamos de la religiosa que acompañó a María y Mario, el facultativo anotó en el informe que Mario tenía “lesiones leves”, a pesar de la evidente gravedad de las lesiones infligidas por los perpetradores.

El día 2 de mayo de 1987, aparecieron en la prensa sendos reportajes de la noche trágica vivida por Mario Mejías Huircán en la madrugada del 1° de mayo de 1987. La Tercera, El Mercurio, Las Últimas Noticias, El Fortín, Clarín, entre otros medios de comunicación, publicaron la noticia del secuestro y golpiza al poblador de Lo Hermida que habló ante el Papa, y la pérdida de su furgón.

Posteriormente, el 23 de noviembre de 1989, mientras participaba en una manifestación pública en el centro de Santiago en repudio por la incineración de archivos pertenecientes a la Central Nacional de Informaciones (CNI), nuestro mandante fue detenido y arrestado por Carabineros de Chile, luego de que este gritara en contra de los funcionarios policiales que le rociaron gran cantidad de gas spray tóxico en sus ojos a menos de un metro de distancia. Ante el fuerte dolor e incapacidad que le provocó la agresión de los policías, exclamó en contra de los funcionarios, quienes aprovecharon para arrestarlo por “ofensas contra Carabineros”.



«RIT»

Foja: 1

Luego de ello, el 28 de noviembre de ese año, la Sexta Fiscalía Militar lo declaró “encargado reo”, y lo mantuvo en prisión de manera indefinida.

Por medio de los abogados de la Vicaría, se solicitó a la Fiscalía Militar le permitiera acceder a “libertad bajo fianza”, lo que fue rechazado por esa institución.

Nuevamente el nombre de Mario Mejías saltó a los medios de comunicación, acaparando portadas. Esto llevó a que la Iglesia comenzara a hacer solicitudes al Gobierno para obtener la libertad de nuestro mandante. Incluso, lograron que abogados del “International Human Rights Law Group”, oficina de abogados de derechos humanos con domicilio en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos, intercedieran por Mario Mejías, solicitando directamente al Presidente de la Corte Marcial, señor Juan González, que ante los injustos hechos por los cuáles fue procesado, le permitieran la libertad incondicional o bajo fianza en el más breve plazo.

Ante la presión social, nacional e internacional, sobre la Fiscalía Militar, la Corte Marcial y el Gobierno, es que, ante la apelación del fallo que negó la libertad bajo fianza el 6 y 12 de diciembre de 1989, finalmente el 27 de diciembre de ese año, la Corte Marcial aprobó otorgarle el beneficio, saliendo en libertad bajo fianza, lo que fue motivo de publicación en diarios nacionales al día siguiente.

En total estuvo desde el 23 de noviembre al 27 de diciembre preso en la Ex Penitenciaría, es decir, 34 días privado de libertad.

Agrega que su representado, se encuentra calificada como víctima de prisión política y torturas, según consta en el listado de prisioneros políticos y torturados con el número 5.216, por haber sido sometido a allanamiento del hogar, secuestro, torturas, apremios ilegítimos, amenazas, persecución y privación de libertad, al demandante a manos de los servicios de inteligencia de la dictadura, a partir del 1º de mayo de 1987 y hasta el 27 de diciembre de 1989.

Bajo el subtítulo “Fundamentos de Derecho”, se ha verificado que el ilícito se produjo por actuaciones del Estado y sus agentes, los cuales, organizados y amparados en un contexto de impunidad apoyados con recursos estatales, infringieron a su representado y su familia, prisión, tortura y tratos degradantes e inhumanos que califican como delitos de Lesa humanidad, lo que conlleva -como lo han señalado los tribunales de justicia- no solo aparejada la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción penal que de él emana sino que, además, la inviabilidad de proclamar la extinción -por el transcurso del tiempo- del eventual ejercicio de la acción civil indemnizatoria derivada del delito y que la normativa del Derecho internacional, está integrada al ordenamiento jurídico nacional y es



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NXUSXQSJQRK

**Foja: 1**

vinculante, de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política del Estado, e incluso por el propio derecho interno, que como lo ha señalado la jurisprudencia en un fallo del año 2018, ya que en virtud de la dictación de la Ley 19.123 se reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas, beneficios de carácter económico o pecuniario.

Así la obligación de reparar a las víctimas y sus familiares, de acuerdo con la normativa convencional de Derechos Humanos, también se ve expresada en el Principio de legalidad que precisa el concepto de Estado de Derecho, estableciendo la sujeción material de los órganos del Estado a la constitución y a las leyes y a las competencias definidas por la ley (artículo 61 y 71 CPE) y la infracción a aquello acarreará las responsabilidades que determine la Ley, sumado a que, al establecer el legislador, las bases esenciales de la administración pública, plasmada en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley 18.575), establece una regla específica que alude a la responsabilidad patrimonial, al reconocer una acción a cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado.

A continuación se refiere a la responsabilidad del Estado a nivel normativa nacional, señalando que, la responsabilidad extracontractual del Estado se ha encontrado vinculada a la necesidad de establecer mecanismos de garantía de los ciudadanos frente a la Administración y que el Principio de legalidad y de responsabilidad patrimonial de los entes públicos, constituyen la base del Derecho Administrativo, que permiten exigir de la Administración la indemnización por los daños y perjuicios que ocasione la actividad de los poderes públicos en el patrimonio de los ciudadanos, siendo el artículo 42 de la Ley 18.575 (BGAE) que determina la responsabilidad patrimonial por la función administrativa al exigir la ocurrencia de falta de servicio, entendiendo la jurisprudencia como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él (Seguel Cares con Fisco Corte Suprema rol 371-2008).

Con respecto a la normativa Constitucional Responsabilidad Estado en Constitución 1925 y Constitución 1980, la responsabilidad del Estado, consagrada en las Actas Constitucionales números 2 y 3 y, en la actualidad, en la Constitución de 1980, reconoce claros antecedentes en la Constitución Política de 1925, vigente a la época de estos actos ilícitos, existiendo un principio general de derecho administrativo que obliga a responder al Estado por los perjuicios causados por actos u omisiones de sus agentes a las víctimas que no se encuentran obligadas a soportarlos, dentro de otras disposiciones citadas.

Con respecto a la responsabilidad del Estado a la luz del Derecho Internacional arguye que la obligación de los Estados de reparar a las



Foja: 1

víctimas de violaciones de derechos humanos ha sido consagrada como uno de los principios del derecho internacional público en materia de responsabilidad del Estado, que ha sido establecido por la propia Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aclarando la segunda que dicha responsabilidad puede emanar de la actuación de cualquiera de sus órganos, independientemente de su voluntad, actuación que puede estar dentro o fuera de sus atribuciones, o en cumplimiento de la normativa interna, porque es un principio de Derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aun si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno.

Agrega que el Estado de Chile al suscribir tratados, convenciones, declaraciones y múltiples resoluciones a nivel internacional, en donde al ser parte de esta Comunidad se obliga a respetar la costumbre internacional y sus principios generales, va incorporando de forma progresiva una serie de obligaciones que responden a la obligación general de “respeto de los derechos esenciales de la persona” por parte de los Estados.

Así su representado, Mario Mejías Huircán, cédula nacional de identidad 5.864.486-2, ha sido reconocido por el Estado chileno como víctima calificada de prisión política y torturas, delito considerado por el Derecho Internacional como delito de Lesa Humanidad. En virtud de ello, el Estado chileno tiene el deber de dar cumplimiento a los Tratados internacionales y principios que informan los Derechos Humanos a nivel internacional, lo que conlleva que de parte del Estado y de sus órganos de administración se facilite el acceso de las víctimas directas y sus familiares a las compensaciones monetarias a que tienen derecho.

Resulta contrario a derecho tratar de aplicar normas de derecho privado a delitos de lesa humanidad, porque el Estado chileno ha incorporado a nuestra legislación, los Tratados y principios que rigen el Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituyéndose así, estas normas, en norma nacional, vinculante y especial.

Seguidamente con respecto a la imprescriptibilidad de la acción, expone que por la naturaleza del delito, en cuya acción se funda la presente demanda, en que el ilícito de torturas y tratos degradantes e inhumanos, fue reconocido por el Estado y se enmarca en los Delitos de lesa humanidad, los cuales, por su naturaleza son imprescriptibles, no resulta posible argumentar que la acción penal es imprescriptible y la acción civil -que deriva del mismo hecho punible- no lo es.

Finalmente, con respecto a la procedencia de la indemnización del daño moral, expone que la presente acción civil entablada contra el Estado



«RIT»

Foja: 1

de Chile, cuyo objeto es obtener la reparación íntegra de los perjuicios ocasionados por agentes del Estado, se encuentra en los Principios Generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los Tratados ratificados por el Estado de Chile, los cuales en su conjunto obligan a éste a reconocer y proteger el derecho a una reparación completa, en virtud de los artículos 5° inciso 2 y artículo 6° y 7° de la Constitución Política del Estado.

En la actualidad para solucionar el problema de la denominación moral del daño se acepta por la doctrina en general la expresión "perjuicio no patrimonial" o "daño extrapatrimonial" que empieza a generalizarse e incluso imponerse sobre la denominación "daño moral" y que dentro de ello se ha entendido que una forma de cumplimiento de éste deber de garantía es la reparación a las víctimas y que en los fallos recientes, ha comenzado a presumirse la efectividad de los gastos y el criterio para su valorización ha sido el de la equidad.

Previas citas legales, pide tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en juicio ordinario, en contra del Fisco de Chile, someterla a tramitación, acogerla en todas sus partes declarando que se condena al Fisco de Chile a pagar al demandante la suma de \$200.000.000.- (doscientos millones de pesos) como víctima calificada de prisión política y torturas, con ocasión de las torturas y tratos inhumanos y degradantes de la que fue objeto; desde el 1° de mayo de 1987 al 27 de diciembre de 1989; ilícitos cometidos por agentes del Estado de Chile y ya relatados en este libelo pretensor, o bien, en su defecto, a la suma que este tribunal considere en justicia según los parámetros del derecho internacional y la legislación nacional pertinente, cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de esta demanda y el pago efectivo de la indemnización, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período, y las costas de la causa.

Con fecha 25 de enero de 2024, según estampado receptorial de folio 8, consta haberse notificado la demanda el, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 del Código de Procedimiento Civil.

A través de presentación ingresada el 15 de febrero de 2024 a folio 10, comparece doña Daniela Domínguez Domínguez, Abogada Procurador Fiscal (S) de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, quien contestó la demanda solicitando su rechazo conforme a los argumentos que expone.

Tras efectuar un resumen de la demanda, opone excepción de reparación integral, improcedencia de la indemnización alegada por haber sido el demandante ya indemnizado. Indica que no resulta posible comprender el régimen jurídico de las reparaciones por infracciones a



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NXUSXQSJQRK

Derechos Humanos sino se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional.

En efecto, continúa, dicha comprensión sólo puede efectuarse al interior -y desde- lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada Justicia Transicional. Sólo desde esa óptica puede mirarse en mejores condiciones los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria.

Agrega que, en efecto, el denominado dilema "justicia versus paz" es, sin lugar a dudas, uno de los pilares sobre los cuales descansa el edificio de aquella justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso "nunca más". En esta perspectiva, las transiciones son, y han sido siempre, medidas de síntesis mediante las cuales determinadas sociedades, en específicos momentos históricos, definen las proporciones de sacrificio de los bienes en juego al interior de aquel profundo dilema. Por otro lado, manifiesta que no debe olvidarse que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Mal que mal el éxito de los procesos penales se concentra sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación.

Señala que estos programas incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos y otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, no es un secreto que las transiciones han estado, en todos los países que las han llevado a cabo, basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar someramente las discusiones originadas en la aprobación de la ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ellas. Asevera que no debe extrañar que muchas de esas negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros cuyos intereses se estiman más lejanos, se compensen algunos daños y se excluyan otros o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño.

Seguidamente, expone la complejidad reparatoria, citando a Lira, señalando que los objetivos a los cuales se abocó preferentemente el gobierno de don Patricio Aylwin en lo que respecta a la justicia transicional fueron "(a) el establecimiento de la verdad en lo que respecta a las



Foja: 1

violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura; (b) la provisión de reparaciones para los afectados; y (c) el favorecimiento de las condiciones sociales, legales y políticas que prevean que aquellas violaciones puedan volver a producirse".

En lo relacionado con aquel segundo objetivo, la llamada Comisión Verdad y Reconciliación, o también llamada Comisión Rettig, en su Informe Final propuso una serie de "propuestas de reparación" entre las cuales se encontraba una "pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas" y algunas prestaciones de salud. Dicho informe sirvió de causa y justificación al proyecto de ley que luego derivaría en la Ley N° 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. El mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, "reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas".

Refiere que en lo relativo a la forma en que se entendió la idea de reparación, el ejecutivo, siguiendo aquel informe, entendió por reparación "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho informe". A dicha reparación ha de ser convocada y concurrir toda la sociedad chilena en un "proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectadas". Compensación de daños morales y mejora patrimonial, son dos claros objetivos de estas normas reparatorias.

Añade que, de esta forma, en la discusión de la Ley N°19.123 el objetivo indemnizatorio de este grupo de normas quedaría bastante claro. En diversas oportunidades, por ejemplo, se hizo referencia a la reparación moral y patrimonial buscada por el proyecto. La noción de reparación por el dolor de las vidas perdidas es encontrada también en otras tantas ocasiones. También está presente en la discusión la idea de que el proyecto buscaba constituir una iniciativa legal de indemnización y reparación. Incluso se hace expresa referencia a que las sumas de dinero acordadas son para hacer frente la responsabilidad extracontractual del Estado. Así las cosas, esta idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones de la Comisión se indicó que le corresponderá especialmente a ella promover la reparación del daño moral de las víctimas a que se refiere el artículo 18. Asumida esta idea reparatoria, señala, la Ley N°19.123 y otras normas jurídicas conexas han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional.





En este sentido, indica que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones, a saber: a) Reparaciones mediante transferencias directas de dinero; b) Reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas; y c) Reparaciones simbólicas.

Mediante estos tres tipos de reparaciones se ha concretado el objeto de nuestro particular proceso de justicia transicional, que en lo que a este acápite respecta, busca no otra cosa que la precisa reparación moral y patrimonial de las víctimas. Un análisis de estas compensaciones permitirá verificar el ámbito compensatorio que ellas han cubierto.

Bajo el subtítulo “Reparación mediante transferencias directas de dinero”, afirma que diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones, incluyendo también a las personas que fueron víctimas de apremios ilegítimos.

Destaca que en la discusión legislativa de estas normas se enfrentaron principalmente dos posiciones. Por un lado, algunos sostenían que la reparación que se iba a entregar debía hacerse a través de una suma única de dinero, mientras otros, abogaban por la entrega de una pensión vitalicia. Ello no implicaba de manera alguna que la primera opción tendría efectos indemnizatorios y no así la segunda. Ambas modalidades tendrían fines resarcitorios.

En términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de: Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley N°19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley N°19.992 (Comisión Valech); Bonos: la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley N° 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley N°19.992; c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley N° 19.123 y bono extraordinario (Ley N° 20.874), la suma de \$23.388.490.737.- Concluye que a diciembre de 2019, el Fisco ha desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-

Manifiesta que, desde una perspectiva indemnizatoria, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, ello no obsta a que pueda valorizarse para poder saber cuál fue su impacto compensatorio.

Indica que el cálculo de los efectos indemnizatorios de una pensión vitalicia puede realizarse simplemente sumando las cantidades pagadas a la fecha, como asimismo las mensualidades que todavía quedan por pagar.



Foja: 1

Agrega que como puede apreciarse, el impacto indemnizatorio de este tipo de pensiones es bastante alto. Ellas son, como se ha entendido de manera generalizada, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos, obteniéndose de ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Refiere luego, las reparaciones específicas. Ley N°19.992 y sus modificaciones sobre prisioneros y torturados políticos. Señala que el actor ha recibido beneficios pecuniarios al amparo de las leyes N° 19.234 y 19.992 y sus modificaciones, la segunda de ellas estableció una pensión anual de reparación y otorgó otros beneficios a favor de las personas afectadas por violaciones de derechos humanos individualizados en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados” de la nómina de personas reconocidas como víctimas.

Afirma que se estableció una pensión anual reajutable de \$1.353.798.- para beneficiarios menores de 70 años; de \$1.480.284.- para beneficiarios de 70 o más años de edad y de \$1.549.422.- para beneficiarios mayores de 75 años de edad.

Acto seguido, alude a las reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas. Manifiesta que tal como sucede en la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación se realiza no sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones.

Hace ver que se concedió a los beneficiarios tanto de la Ley N° 19.234 como de la Ley N° 19.992, el derecho a gratuidad en las prestaciones médicas otorgadas por el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) en Servicios de Salud del País. Indica que para acceder a estos servicios la persona debe concurrir al hospital o consultorio de salud correspondiente a su domicilio e inscribirse en la correspondiente oficina del PRAIS.

Expresa que además del acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial, PRAIS cuenta con un equipo de salud especializado y con atención exclusiva a beneficiarios del programa. Adicionalmente, detalla otros tipos de beneficios a los beneficiarios y sus familias, en particular en el ámbito educacional y de vivienda.

Luego, expresa que, dentro de las reparaciones simbólicas, es importante que, en los procesos de justicia transicional, que la reparación de los daños se realice mediante actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones, no a través de dinero sino mediante una reparación del dolor y tristeza producidos. Evidencia que parte de ello fue la construcción del Memorial del Cementerio General en



Foja: 1

Santiago del año 1993, el establecimiento mediante el Decreto N° 121, de 2006, del Día Nacional del Detenido Desaparecido, construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, entre otros.

Bajo el subtítulo “identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas”, sostiene que tanto la indemnización que se solicita en autos como el cúmulo de reparaciones antes indicadas pretenden compensar los mismos daños ocasionados por los mismos hechos, de manera que no procede repararlos nuevamente. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema en apoyo de sus argumentos.

Reclama que dar lugar nuevamente a demandas de indemnización de perjuicios, genera inevitablemente un acceso desigual a la justicia y a las reparaciones provocando el efecto de debilitar la decisión política y administrativa de la reparación.

Concluye que estando la acción interpuesta en autos basada en los mismos hechos y pretendiendo indemnizar los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias que enunció anteriormente, y de acuerdo a los documentos oficiales que dice acompañará a los autos, opone la excepción de reparación integral por haber sido ya indemnizada la parte demandante.

Acto seguido y subsidiariamente, alega la prescripción extintiva de la acción de conformidad a los artículos 2332 y 2497 del Código Civil. Hace ver que según el relato efectuado por el demandante, la detención ilegal y vejaciones que sufrió, de manera que entendiendo suspendida la prescripción durante el periodo de dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad del propio demandante de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, a la fecha de notificación de la demanda, ha transcurrido en exceso el plazo de 4 años de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332. Luego, en subsidio de lo anterior, opone excepción de prescripción de 5 años de conformidad a los artículos 2514 y 2515 del Código Civil.

Ahondando en los argumentos que sostienen la prescripción invocada, indica que la imprescriptibilidad de las acciones es excepcional, requiriendo siempre una declaración explícita, la que en este caso no existe. Añade que las normas de prescripción se aplican a favor y en contra del Estado. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema en apoyo de sus alegaciones.

Por otro lado, expone que los tratados internacionales invocados por la parte demandante, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil, sino únicamente se refieren a la responsabilidad penal, citando jurisprudencia en este sentido.



«RIT»

Foja: 1

Finalmente, postula que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, esto es, el artículo 2332 del Código Civil, citando jurisprudencia en apoyo de sus argumentos.

En último término, se refiere al daño e indemnización reclamada, manifestando que, tratándose del daño puramente moral, la finalidad reparatoria no es alcanzable, así como tampoco resulta posible poner a la víctima en el lugar en que se encontraba antes de producirse el daño. Explica que la indemnización del daño moral solo sirve para otorgar a la víctima satisfacción, ayuda o auxilio para atenuar o morigerar, y en ese sentido el monto demandado aparece como excesivo.

En subsidio de las excepciones anteriores, de reparación y prescripción, solicita que la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos por el demandante del Estado (Leyes N° 19.123, 19.234, 19.992, sus modificaciones y demás normas pertinentes), y que seguirá percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extra patrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. Indica que de no acceder a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Añade que igualmente para la adecuada regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia, lo que implica rebajar sustancialmente los montos pecuniarios demandados.

Finalmente, hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada. Por otro lado, indica que los intereses se deben solo cuando el deudor ha sido reconvenido y retardado el cumplimiento de la sentencia.

Con fecha 21 de febrero de 2024 a folio 15, la parte demandante evacuó su réplica, reiterando los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda y pidió el rechazo de las excepciones de la demandada, haciendo presente con respecto a la reparación integral, que el Estado de Chile al exponer sus argumentos, cita latamente los antecedentes del proyecto de Ley 19.123 y señala tres tipos de compensaciones, que, a su entender, deberían haber compensado moral y patrimonialmente a la víctima: reparaciones mediante transferencias directas en dinero, reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas y reparaciones simbólicas, resultan insostenible frente a los



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NXUSXQSJQRK

«RIT»

Foja: 1

hechos expuestos y al derecho latamente señalado en el escrito de la demanda presentada. El demandado alude que ya se habría indemnizado al amparo de los beneficios de las leyes N° 19.123, Ley N°19.234 y Ley N° 19.992, sin embargo, no debe entenderse que las prestaciones establecidas en estas leyes pugnan con la pretensión indemnizatoria presentada, ya que es la misma Corte que ha señalado en reiteradas ocasiones, que estas leyes fueron creadas de forma general, sin que pueda presumirse que el Estado ha pretendido con ellas una reparación íntegra del daño causado.

Seguidamente se refiere a la improcedencia de la excepción de prescripción extintiva, mencionado que la contraria sostiene que la prescripción de las acciones de indemnización de perjuicios debe regularse por las normas civiles, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 2332 y en subsidio el artículo 2515 con relación al artículo 2514. Sin embargo, yerra en normativa al caso a aplicar, ya que estas están contenidas en el ordenamiento constitucional, en las normas convencionales de derecho internacional y en el ordenamiento administrativo, citando posteriormente jurisprudencia al respecto.

Manifiesta igualmente que la acción indemnizatoria que emana de delitos de Lesa Humanidad, no puede ser abordada como mera acción patrimonial, sino como acción reparatoria.

Añade con respecto al daño e indemnización reclamada que siguiendo el criterio establecido por el derecho internacional y especialmente por la Corte Interamericana de Justicia, y su consagración normativa en los Tratados ratificados por el Estado de Chile, en virtud de los artículos 5° inciso 2 y artículo 6° de la Constitución Política del Estado los cuales en su conjunto obligan a éste a reconocer y proteger el derecho a una reparación completa.

Con fecha 6 de marzo de 2024 a folio 18, la parte demandada evacuó la réplica, reiterando todas las alegaciones expuestas en su escrito de contestación de demanda.

Por resolución de fecha 11 de marzo de 2024, a folio 20, se recibió la causa a prueba por el término legal, rindiendo la que consta en autos.

Con fecha 3 de mayo de 2024 se citó a las partes a oír sentencia.

## **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que en estos autos don Mario Mejías Huircán, debidamente representado, deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado legalmente por don Raúl Letelier Wartenberg, todos ya individualizados, a fin de que sea condenado a pagar la suma de \$200.000.000.- (doscientos millones de pesos) como indemnización por los daños morales sufridos a consecuencia de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NXUSXQSJQRK

Foja: 1

allanamiento ilegal del hogar, secuestro, torturas, apremios ilegítimos, amenazas, persecución y privación de libertad de aquel a manos de los servicios de inteligencia de la dictadura, a partir del 1° de mayo de 1987 y hasta el 27 de diciembre de 1989.

**SEGUNDO:** Que por su parte el demandado Fisco Chile compareció a la instancia contestando la demanda de autos, solicitando en definitiva el rechazo de la acción en todas sus partes, oponiendo las excepciones de reparación integral y la de improcedencia de la indemnización por haber sido ya indemnizado el demandante. Seguidamente, alega la prescripción extintiva de la acción por haber transcurrido en exceso el plazo de 4 años contemplado en el artículo 2332 del Código Civil cuya aplicación estima procedente, y en subsidio, la prescripción extintiva ordinaria de 5 años, objetando, en subsidio de todo lo anterior, el monto indemnizatorio exigido por el actor a título de daño moral, solicitando que en la regulación de éste se consideren los pagos, pensiones e indemnizaciones que ha recibido la parte demandante.

**TERCERO:** Que la presente controversia radica en determinar si en la especie concurren los requisitos de la responsabilidad patrimonial del Estado y, en consecuencia, si el Fisco se encuentra obligado a indemnizar el daño moral reclamado por el actor, fundado en la detención ilegal y golpes que experimentó don Mario Mejías Huircán en el contexto político del régimen militar de 1973.

**CUARTO:** Que la responsabilidad civil tiene por finalidad reparar económicamente a la víctima o con mayor precisión, compensar el daño sufrido por ésta como consecuencia de un hecho ilícito. En este sentido, lo que se busca es proporcionar a la víctima una cantidad de dinero que le permita sobrellevar de mejor manera el daño sufrido, mediante el goce y disfrute de otras cosas, atendido el carácter transaccional de éste. En razón de ello, se dice que la indemnización monetaria no es una genuina reparación, pues no hace desaparecer el daño ni mucho menos el hecho generador de éste, sino que más bien, otorga los medios económicos a la víctima para que ésta encuentre satisfacción en la adquisición de bienes o servicios.

**QUINTO:** Que, en lo concerniente a la responsabilidad del Estado y sus órganos, el principio general expresado anteriormente se ha concretizado bajo la institución de la falta de servicio, criterio general de atribución equivalente a la culpa o negligencia que funda la reparación de los daños extracontractuales. De aquí que la doctrina y jurisprudencia, estimen que la responsabilidad civil o patrimonial de los órganos públicos puede ser perseguida, ya sea de acuerdo a las normas de derecho público (Constitución Política de la República, Ley de Bases Generales de la



«RIT»

Foja: 1

Administración del Estado, etc.), como a partir de la normativa de derecho privado (artículos 2314 y siguientes del Código Civil).

**SEXTO:** Que en este sentido si bien en la actualidad, es un lugar común hablar de la unidad de responsabilidades públicas y privadas a fin de garantizar reglas y principios equitativos para los particulares que buscan la reparación de sus daños ocasionados por el Estado, ello no conlleva un desconocimiento de las peculiaridades de las relaciones de derecho público (administrativa, legislativa y judicial), en particular, respecto del complejo contenido y finalidad que el órgano estatal persigue con cada una de sus actuaciones.

**SÉPTIMO:** Que sin perjuicio de lo anterior, la acción civil aquí deducida en contra del Fisco, tendiente a obtener la reparación íntegra de los perjuicios que han sido ocasionados al actor, encuentra también su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile, los cuales obligan al Estado chileno a reconocer y proteger este derecho a la reparación íntegra, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° y en el artículo 6° de la Constitución Política de la República.

Los artículos 1.1 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, consagran que la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos queda sujeta a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, pues si se verifica un hecho ilícito imputable a un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación de una norma de esta índole, con el consecuente deber de reparación y de hacer cesar las consecuencias de la violación.

**OCTAVO:** Que estas normas de rango superior imponen un límite y un deber de actuación a los poderes públicos, y en especial a los tribunales nacionales, en tanto éstos no pueden interpretar los preceptos de derecho interno de un modo tal que dejen sin aplicación las normas de derecho internacional que consagran este derecho a la reparación, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

**NOVENO:** Que a fin de acreditar lo correspondiente, la parte demandante acompañó los siguientes documentos a la carpeta electrónica: 1) Certificado de nacimiento de MARIO MEJÍAS HUIRCÁN, cédula nacional de identidad 5.864.486-2. 2) Certificado emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, de fecha 20 de marzo de 2024, que certifica que don MARIO MEJÍAS HUIRCÁN, cedula de identidad N°5.864.486-2, se encuentra calificado como víctima en el listado de prisioneros políticos y torturados, elaborado por la Comisión Nacional



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NXUSXQSJQRK

Foja: 1

Sobre Prisión Política y Tortura. 3) Copia autorizada de la carpeta entregada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos presentados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, de don MARIO MEJÍAS HUIRCÁN, Informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura. 4) Noticia sobre la libertad bajo fianza de don MARIO MEJÍAS HUIRCÁN. 5) Informativo del Movimiento Contra La Tortura Sebastián Acevedo. 6) Noticia de las últimas Noticias sobre la golpiza de don MARIO MEJÍAS HUIRCÁN. 7) Extractos noticiosos del diario Las Ultimas Noticias de fecha 3 de mayo de 1987 referentes a la agresión a don MARIO MEJÍAS HUIRCÁN. 8) Extracto de noticia denominada “Deleznable Venganza contra la verdad y el valor” referente a la tortura sufrida por don MARIO MEJÍAS HUIRCÁN. Diario El Cauce. 9) Noticia titulada “500 personas asisten a la misa de homenaje al poblador Mario Mejía” del diario La Época. 10) Noticia titulada “Apareció el furgón del poblador que habló a S.S.”, del diario Las Ultimas Noticias. 11) Querella por secuestro y golpizas a don MARIO MEJÍAS HUIRCÁN. 12) Noticia “Interpusieron Querella por Agresiones al Poblador que habló al Papa”. Diario La Época. 13) Noticia “El Papa estudia protesta formal contra el régimen” diario FORTIN Mapocho, miércoles 5 de mayo de 1987. 14) Noticia “sobre atentado a poblador: Nuncio reiteró condena del papa”, diario las Ultimas Noticias, jueves 7 de mayo de 1987. 15) Conjunto de Noticias emitidas por el diario FORTIN Mapocho de fecha 14 de mayo de 1987. 16) Noticia “gloria y calvario de Mario Mejias”, diario El País. 17) Noticia “Reconstituyeron Secuestro del Poblador Mario Mejias”, diario Fortin Mapocho, de fecha jueves 14 de mayo de 1987. 18) Carta de la Parroquia Jesus Servidor. 19) Carta de Internacional Human Rights Law Group, de fecha 21 de diciembre de 1989. Dirigida a la Corte Marcial de Chile. 20) Resumen de hechos, confeccionada por parroquia “Jesús Servidor”. 21) Carta de Internacional Human Rights Law Group, confeccionada por doña Amy Young, directora ejecutiva. 22) Certificado emitido por la Vicaría de la Solidaridad, de fecha 30 de julio del año 2005. 23) Entrevista ADN Radio, a don MARIO MEJÍAS HUIRCÁN, de fecha 25 de septiembre de 2012. 24) Reportaje de diario La Cuarta, “Mario revivió su mensaje ante el Papa en los 80”, de fecha 25 de septiembre de 2012. 25) Solicitud de alzamiento de arraigo en causa ROL N°73 año 2001 y N°159.362 año 1990, del ex - 3° juzgado del crimen de Santiago. Acompañado junto con el oficio N°1013/pam, emitido por doña Claudia Pamela Salgado Rubilar, Juez Suplente del 34° Juzgado del Crimen de Santiago. De fecha 12 de febrero de 2016. 26) Informe elaborado por el equipo de salud de la Vicaria de la Solidaridad, titulado “Salud Mental y Violación a los Derechos Humanos”. Junio de 1989. 27) Documento privado de carácter científico, emitido por profesionales de la Fundación Social de Ayuda de Iglesias Cristianas FASIC, en el cual sistematizan sus experiencias obtenidas en la asistencia y tratamiento de familiares de





Foja: 1

personas Ejecutadas Políticas. 28) Informe privado de carácter científico, emitido por profesionales de la Vicaría de la Solidaridad, titulado “Algunos problemas de salud mental detectados por equipo psicológico-psiquiátrico”. El cual fue incorporado en los autos rol C-22.561-2018, del 28° Juzgado Civil de Santiago, seguidos por la misma materia. 29) Informe Psicológico de daños asociados a la violencia política, emitido por MARÍA ANGÉLICA CORREA CABRERA, C.I.: 6.699.010-9, perteneciente a la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), relativo al entrevistado MARIO MEJÍAS HUIRCÁN, C.I.: 5.864.486-2.

**DÉCIMO:** Que, de otro lado, a folio 17, rola oficio respuesta del Instituto de Previsión Social, bajo el número ORD.: DSGT N° 21012-2024, el que informa acerca de los beneficios de reparación -como beneficiario de las Leyes N° 19.992 y 20.874- se han otorgado a don Mario Mejías Huircán, que en síntesis consigna que aquel, ha recibido la cantidad de \$27.925.485.- entre octubre de 2011 a febrero de 2040, más aporte único Ley N° 20.874 por \$1.000.000.- y aguinaldos por \$497.401.- lo que suma a un total de \$29.422.886 ascendiendo la pensión actual Valech a \$264.898.

**UNDÉCIMO:** Que, cabe precisar que el libelo describe una seguidilla de episodios, para concluir que la presente demanda se funda en haber sido el demandante sometido a allanamiento del hogar, secuestro, torturas, apremios ilegítimos, amenazas, persecución y privación de libertad, al demandante a manos de los servicios de inteligencia de la dictadura, a partir del 1° de mayo de 1987 y hasta el 27 de diciembre de 1989, y siendo los hechos invocados por el demandante limitantes de la competencia de este Tribunal, se estará a ello para resolver la controversia.

**DUODÉCIMO:** Que en relación al primer supuesto, esto es, la existencia de uno o mas actos o hechos antijurídicos, cabe asentar que la calidad de don Mario Mejías Huircán como víctima de violación a sus derechos humanos no ha sido controvertida por el Fisco, y además puede inferirse a través de la documental acompañada, en especial de la nómina de personas reconocida como víctimas de presión política y tortura por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, en que el Sr. Mejías Huircán figura con el N° 5.216, así como de la información emitida por el Instituto de Previsión Social, asociado a los beneficios pecuniarios que el actor ha recibido desde octubre de 2011 a la fecha.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, en consecuencia, es un hecho establecidos en la causa, al no haber sido controvertidos por las partes y por encontrarse además acreditados con el mérito de la prueba producida por la parte demandante, de conformidad a lo prescrito por los artículos 1700, 1702 y 1706 del Código Civil, que el demandante fue calificado como víctima por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Valech



Foja: 1

II), incluyéndose en la Nómina bajo el N° 5.216, así como de la información remitida por el Instituto de Previsión Social.

**DÉCIMO CUARTO:** Que conforme a la naturaleza de la materia, del mérito de las probanzas reseñadas en los motivos anteriores, se tiene por acreditado en estos autos que el actor don Mario Mejías Huircán, fue sacado en horas de la madrugada violentamente desde su hogar en la Población Lo Hermida, casa a la que ingresaron sujetos presuntamente agentes de represión, siendo golpeado severamente, fue trasladado en un vehículo hasta un sitio eriazo en la comuna de Conchalí, para ser abandonado, provocándole lesiones en su rostro y cuerpo, de diversa gravedad, por lo que fue trasladado a la posta central.

Del mismo modo, que el día 23 de noviembre de 1989 fue detenido mientras estaba en protesta del movimiento Sebastián Acevedo por Carabineros, para luego ser puesto a disposición de 6a Fiscalía Militar de Santiago causa Rol 1718-89, permaneciendo privado de libertad, donde fue dejado en un calabozo en Penitenciaría por 34 días, para luego obtener el beneficio de libertad bajo fianza aprobado por la Corte Marcial.

**DÉCIMO QUINTO:** Que si bien, la privación de libertad por 34 días se produjo al alero de un proceso seguido en justicia militar, cuya validez y legitimidad no ha sido impugnada ni declarada, de la concatenación de los hechos parece dable presumir que la detención y posterior prisión fue parte de una serie de actos de persecución y represión en contra del actor, cuyo origen se remonta a la intervención que tuvo el sr. Mejías al dar un testimonio en un discurso en un acto publico ante el Papa, en su visita oficial en el año 1987, hecho público por todos conocido.

**DÉCIMO SEXTO:** Que así, las conductas descritas dan cuenta de la comisión de sendos actos ilegales y arbitrarios, detención ilegal, secuestro, golpes, apremios ilegítimos, vigilancia y hostigamiento, que afectan lo más esencial de los seres humanos, como la vida, integridad física, libertad y dignidad y que por su extensión y alcance trascienden al propio individuo, afectando a la humanidad toda, y por tanto se encuadran en el concepto de delito de lesa humanidad, calificación que adquiere relevancia jurídica a los fines de las defensas fiscales.

Que además, los perjuicios sufridos por el actor aparecen como consecuencia natural y lógica de todo lo vivido, hechos que indudablemente afectan de sobremanera la vida de cualquier persona, provocando entre otras cosas, consecuencias considerables en el plano social, físico y mental, que son innegables.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que habiéndose acreditado la existencia del hecho dañoso que se reclama de conformidad a lo dispuesto en el artículo



1698 del Código Civil, corresponde pronunciarse sobre las defensas de la demandada.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que en torno a la excepción de *prescripción extintiva* de la acción, incoada plateada por la parte demandada, huelga tener presente que el hecho que motiva esta acción, es de aquellos que la doctrina y tribunales superiores de justicia reconoce como graves crímenes de lesa humanidad, tal y como lo establece los Convenios de Ginebra del año 1949, toda vez que estos hechos y especialmente los descritos en el motivo 14° ocurrieron en un contexto de excepción a nuestra democracia, período en que se vulneraron de manera grave, sistemática y masivamente los derechos humanos de las personas oponentes al régimen de entonces o a simples civiles que no adherían a ningún movimiento político, con el único fin posible de amedrentar al resto de la población civil, todo ello cometido por agentes del Estado o por civiles amparados por éste.

**DÉCIMO NOVENO:** Que cabe precisar que la acción indemnizatoria que se deduce se encuentra sustentada en las torturas acreditadas que ha sufrido el actor por el Estado Chileno con enorme poder de coerción y uso de fuerza, vulnerándose con aquello lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, norma última que establece que nadie debe ser sometido a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes que así si bien la acción indemnizatoria tiene un contenido patrimonial obedece a índole humanitaria proveniente de los derechos de todos ser humano reconocidos en el tratado internacional indicado, que prima de acuerdo a las normas de derecho interno en específico al artículo 2497 del Código Civil.

**VIGÉSIMO:** Que por otro lado sustenta la tesis de inaplicabilidad de la norma del Código Civil antes mencionada por el artículo 2° de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos que obliga a los estados parte a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades y el artículo 5° de la Constitución Política de la República que reconoce como limitación a la soberanía el respeto de los derechos esenciales que emana de la naturaleza humana y la obligación del mismo de promover dichos derechos fundamentales.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que en efecto, ya la jurisprudencia se ha pronunciado en el sentido que la presente acción civil deriva justamente de hechos tipificados como crímenes de lesa humanidad los cuales no prescriben, por lo que resultaría incoherente entender que la acción de reparación está sujeta a normas de prescripción, puesto que ello atenta los principios del Derecho Internacional que establecen la obligación permanente del Estado de reparar a las víctimas de estos crímenes considerados de los más atroces, tal como se establece en el Pacto de



Foja: 1

Derechos Civiles y Políticos, de fecha 23 de marzo de 1976, Parte III, artículo 9, numerando quinto, y la Resolución Aprobada 56/83 de la Asamblea General de Las Naciones Unidas, de fecha 28 de enero 2002, sobre Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, en especial su capítulo segundo; y teniendo presente especialmente que ambas acciones se sustentan en el mismo hecho ilícito.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que, dado que los Derechos Humanos reconocidos en la Convención son inherentes al ser humano durante toda la existencia de éste, no es posible sostener a juicio de esta sentenciadora que un Estado pretenda desconocer la reparación necesaria y obligatoria por el mero transcurso de éste, ya que ello significaría desconocimiento del Derecho Humano conculcado.

**VIGÉSIMO TERCERO:** Que sustenta lo anterior el artículo 131 del Convenio de Ginebra que sostiene que ninguna parte contratante podrá exonerarse, ni exonerar a otra parte contratante, de las responsabilidades en que haya incurrido ella misma u otra parte contratante a causa de las infracciones previstas en el artículo 130 en el que se incluye la tortura o tratos inhumanos.

Por lo demás, el que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad establezca en su artículo 4° la imprescriptibilidad de la acción penal a los crímenes mencionados en el artículo 1 entre otros, esto es los de lesa humanidad no conlleva necesariamente la exclusión de la imprescriptibilidad de la acción civil, máxime considerando el contexto del preámbulo de la convención en análisis, en especial aquellos de los párrafos 3, 4, 6 y 7.

**VIGÉSIMO CUARTO:** Que además, huelga tenerse presente que no nos encontramos frente a una acción de indemnización de perjuicios “común” que derive de relaciones contractuales o extracontractuales propias del derecho interno, sino que como se dijo, nos encontramos ante una acción que se sustenta en situaciones de carácter humanitaria y que por lo tanto debe sujetarse a normas y principios y las reglas internacionales que conforman el *ius cogens*, propias del Derecho Internacional; así y de acoger la tesis planteada por la demandada en este punto, resultaría una grave infracción a las obligaciones internacionales que ha contraído nuestro Estado, es así que habiendo ratificado Chile la Convención de Viena en 1980, la que en su artículo 27 establece que un Estado no puede invocar su propio derecho interno para eludir sus obligaciones internacionales, como por ejemplo -y como se ha venido señalando- la de reparación, norma, que por lo demás, según nuestro ordenamiento interno tiene rango constitucional de acuerdo al artículo 5° de la Constitución Política del Estado, por lo que contrariar la norma mencionada, sería incluso infringir a nuestro propio sistema jurídico.



**VIGÉSIMO QUINTO:** Que por otra parte el artículo 2332 del Código Civil señala que: “*las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años, contados desde la perpetración del acto*”; el artículo 2514 señala que: “*la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible*”; finalmente el artículo 2515 de igual cuerpo legal señala que el tiempo es de 5 años para las acciones ordinarias.

**VIGÉSIMO SEXTO:** Que, en ese contexto, el estatuto del derecho privado chileno regula relaciones entre particulares, regidas por los principios de la autonomía de la voluntad y en plano de igualdad, cuestión inaplicable al caso *sub lite*, donde se busca regular y sancionar en el ámbito de derecho público, relaciones verticales del Estado con los particulares, determinando las responsabilidades que éste tenga por las afectaciones de derechos por parte de sus agentes.

**VIGÉSIMO SÉPTIMO:** Que resulta inconcuso que tratándose del resarcimiento de las transgresiones a los Derechos Humanos, la fuente de responsabilidad civil o el estatuto aplicable, no puede encontrarse en nuestro Código Civil, toda vez que las normas de regulación y protección de tales derechos son posteriores a nuestra codificación, y las allí contenidas no fueron concebidas por Bello para la solución de problemas contemporáneos, como el de marras, para los cuáles ha devenido el desarrollo de nuevas concepciones al amparo del Derecho Internacional, el que incorporado en virtud del artículo 5º de nuestra Constitución Política, resulta absolutamente vinculante y obligatorio.

**VIGÉSIMO OCTAVO:** Que así, en el caso *sub lite*, la detención y vejaciones vividas, así como la persecución y hostigamiento sufrido posteriormente, constituyen en el hecho actividades ilegítimas llevadas a cabo al margen de la juridicidad y constitucionalidad, por ende, se trata de un crimen de lesa humanidad, que de acuerdo al Derecho Internacional a través de normas de *Ius Cogens*, del Derecho Consuetudinario y Derecho Convencional donde se ha declarado su imprescriptibilidad, sin distinción alguna de si ello alude a las acciones penales y civiles, sin que pueda estimarse dicha omisión como suficiente para interpretar dicho cuerpo normativo en contra de sus beneficiarios naturales, lo que no sería sino contrariar su historia fidedigna.

**VIGÉSIMO NOVENO:** Que, en efecto, el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que cuando haya violación de un derecho o libertad habrá derecho al pago de una justa indemnización a la parte lesionada, y el artículo 1.1 trata de las obligaciones de respeto y garantía por parte de los Estados parte de las disposiciones



«RIT»

Foja: 1

contenidas en tal pacto, relativas al respeto y protección de derechos fundamentales.

**TRIGÉSIMO:** Que así no resulta posible aplicar las normas del Código Civil y declarar prescritas acciones indemnizatorias ordinarias emanadas de violaciones a derechos fundamentales, por ser contrarias al orden jurídico internacional, que traducido en Convenios y Tratados y por clara disposición constitucional, son vinculantes para Chile, como ha reconocido y declarado abundante jurisprudencia de nuestros Tribunales Superiores de Justicia, entre otros, en el homicidio de Fernando Vergara, los denominados caso Liguña, Caravana de la Muerte -capítulo San Javier-, Secuestro y Desaparición de Darío Miranda Godoy y Jorge Solovera Gallardo y secuestro y desaparición de Sergio Tormen Méndez.

**TRIGÉSIMO PRIMERO:** Que los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República establecen los principios de igualdad ante la ley de gobernantes y gobernados, siendo responsables tanto de sus acciones como de sus omisiones, asimismo el artículo 4º de la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado, señala que éste será responsable por los daños que causen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado, normas que en conjunto con los tratados internacionales vigentes en Chile, reafirman el deber de responder y resarcir los daños, normas que carecerían de toda validez y operatividad de aplicarse las reglas y plazos del derecho común a materias de tan alto dolor y conocimiento público, como son las violaciones a los Derechos Humanos.

**TRIGÉSIMO SEGUNDO:** Que, por lo señalado precedentemente, esta sentenciadora estima que los cómputos de los plazos establecidos en los artículos 2332 y 2515 no son aplicables en la especie, entran en directa contradicción con normas internacionales, normas de *Ius Cogens*, el Derecho Consuetudinario y el Derecho Constitucional, desechando así la prescripción invocada por la demandada.

**TRIGÉSIMO TERCERO:** Que seguidamente, en lo tocante a la defensa de la demandada invocada como excepción de “*reparación integral*”, cabe señalar que de acuerdo a la información remitida por el Instituto de Previsión Social, el demandante ha recibido beneficios pecuniarios por parte del Estado por el hecho de haber sido calificado como víctima de violaciones a los derechos humanos, percibiendo la suma de \$27.925.485.- entre octubre de 2011 a febrero de 2024, más aporte único Ley N° 20.874 por \$1.000.000.-, y aguinaldos por \$497.401.-, ascendiendo la pensión actual Valech a \$264.898.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NXUSXQSJQRK

Sobre este punto, huelga precisar al respecto que la Ley 19.123, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Conciliación, establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios en favor de las personas que ahí señala, dicho cuerpo legal ha establecido medios voluntarios a través de los cuales el Estado Chileno ha intentado reparar los daños ocasionados a las personas declaradas víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política, pero sin que deba entenderse una supuesta incompatibilidad entre estos resarcimientos y aquellos que legítimamente y por la vía jurisdiccional pretendan las víctimas.

**TRIGÉSIMO CUARTO:** Que, en este sentido, el propio artículo 4° de la citada ley dispone que: *“en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere caber a personas individuales”*, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente.

En consecuencia, se concluye que aun cuando el actor es beneficiario, las mencionadas leyes en parte alguna establecieron una incompatibilidad entre los beneficios que otorga y las indemnizaciones de perjuicios establecidas en sede judicial.

**TRIGÉSIMO QUINTO:** Que asimismo, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en la ley singularizada, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral, en consecuencia, los beneficios establecidos en las Leyes N°s 19.123, 19.992 y 19.980 no resultan incompatibles con la reparación material del daño moral, cuya cuantía y para el caso que sea procedente será determinada en este juicio.

**TRIGÉSIMO SEXTO:** Que, en consecuencia, la acción de indemnización por daño moral impetrada, en caso alguno resulta incompatible con los beneficios que ha recibido el actor, a cualquier título y en cualquier momento, de manera tal que se rechazará la excepción alegada de reparación integral.

**TRIGÉSIMO SÉPTIMO:** Que, así las cosas, desechadas que fueren las defensas fiscales, establecida la existencia del ilícito, corresponde abocarse a la determinación de los daños y la relación de causalidad, para lo cual el actor acompañó el informe de daños expedido y firmado por la psicóloga María Angélica Correa C. y firmado por el Director CODEPU Hiram Villagra Castro, que consinga que la persona evaluada, sufrió discriminación y estigmatización por parte de algunas amistades y vecinos,



Foja: 1

así como hostigamiento por parte de carabineros, y concluye que el demandante tiene un daño asociado a causa del evento represivo que vivió, siendo la experiencia traumática sufrida de alto impacto psicosocial que desencadenó un desorden emocional que lo llevó a un trastorno de estrés post traumático crónico producto de la persecución, secuestro y torturas vividas, lo que provoca un daño irreparable en el proyecto de vida y estabilidad emocional.

**TRIGESIMO OCTAVO:** Que, en este sentido, conforme al antecedente psicológico reseñado anteriormente y demás prueba ponderada, las cuales en su conjunto dan cuenta fehaciente de los trastornos y patologías que afectan al actor como consecuencia de su detención sufrida y relatada en la entrega de antecedentes ante la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura.

Que a la luz del informes psicológico reseñado, sumado a las máximas de experiencia en el sentido que hechos como los establecidos en autos tienen como efecto ordinario y natural, una conmoción interna y afectación a la salud física, síquica y emocional, aparecen indicios que permiten presumir fundadamente que las vivencias a las que fue sometido el actor afectan de sobremanera la normalidad de la vida y acarrear consecuencias psíquicas permanentes, provocando entre otras cosas, trabas para la estabilidad emocional, familiar y social, circunstancias acreditadas por los antecedentes tenidos a la vista, en particular los informes psicológicos, padecimientos que dan cuenta del vínculo causal entre los hechos delictivos acreditados y el daño padecido.

**TRIGÉSIMO NOVENO:** Que, conforme las consideraciones anteriores, no cabe sino dar lugar a la acción indemnizatoria, aunque no por la suma pedida en la demanda, y para la regulación del quantum indemnizatorio se tendrá en consideración no sólo la situación especial padecida, sino también las indemnizaciones fijadas en otros casos de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, considerando que no pueden obviarse los montos que en similares circunstancias se han establecido, baremo que conduce a la determinación de la suma señalada.

**CUADRAGÉSIMO:** Que reconociendo desde luego las falencias que tiene una indemnización en dinero para los hechos vivenciados por el actor, que solo por la vía de la compensación se pretende morigerar en su esfera mas íntima los efectos y secuelas de los mismos, y pese a no haberse rendido prueba concreta directa sobre el estado actual del actor, se tendrá en especial consideración la entidad de las vulneraciones infligidas, así como gravedad de las consecuencias que en la vida del actor tuvo la violación a sus derechos humanos, en especial que se encuentra en una situación de vulnerabilidad al haber sufrido persecución, así como hostigamiento, con





«RIT»

Foja: 1

manifestaciones psicosomáticas, considerando su actual edad (74 años), el secuestro, la golpiza, persecución y el tiempo de detención (34 días).

Que también pesa en esta falladora que los hechos ilícitos sublite dan cuenta de una clara manifestación de una conducta represiva por parte de agentes del estado, como represalia contra el sr. Mejías Huircán por haber intervenido en un acto público y de orden religioso, con amplia cobertura comunicacional e internacional, que causo impacto en la época, tanto por lo que dijo como por los hechos de que fue víctima después.

Que, tales antecedentes llevan a esta juez a regular prudencialmente el quantum indemnizatorio en la suma de \$50.000.000.- atendidas las consecuencias que en su vida tuvo la violación a sus derechos humanos, que fuera reconocida como víctima del Estado Chileno en el Informe de la Comisión Asesora Presidencial para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y víctimas de Prisión Política y Tortura, conocida como Comisión Valech II.

**CUADRAGÉSIMO PRIMERO:** Que los demás antecedentes allegados al proceso en nada alteran lo resuelto precedentemente.

**CUADRAGÉSIMO SEGUNDO:** Que, atendido el carácter declarativo del proceso, la suma ordenada pagar sólo devengará intereses y reajustes una vez que se encuentre firme y ejecutoriada y hasta su pago efectivo.

**CUADRAGÉSIMO TERCERO:** Que atendido el mérito de lo razonado anteriormente y el hecho que la demandada no controvertió sustancialmente los hechos, cada parte pagará sus costas.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 160, 170, 343, 346, 428, 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; artículo 48 del Código Orgánico de Tribunales; artículos 2332 y 2497 del Código Civil; Ley N° 19.992, ley N° 19.123; artículo 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 14.1 de la Convención sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes; artículos 1.1, 2 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; los Principios 15, 18 y 20 de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, se declara:

I.- Que se **rechazan** las excepciones de reparación del daño y de prescripción deducidas por la demandada;

II.- Que se **acoge** la demanda de fecha 28 de diciembre de 2023, en cuanto se condena al Fisco a pagar al demandante Mario Mejías Huircán, cédula de identidad N° 5.864.486-2, la suma de \$50.000.000.- (cincuenta



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NXUSXQSJQRK

«RIT»

Foja: 1

millones de pesos) por concepto de indemnización de perjuicios por daño moral ocasionados por los hechos ventilados en autos entre 1987 y 1989;

III.- Que la suma ordenada pagar devengará reajustes e intereses desde que el presente fallo quede ejecutoriado y hasta su pago efectivo.

IV.- Que cada parte pagará sus costas.

Regístrese, notifíquese, consúltese sino se apelare.

**DECTADA POR DOÑA ROCÍO PÉREZ GAMBOA, JUEZA  
TITULAR.**

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, nueve de octubre de dos mil veinticuatro**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: NXUSXQSJQRK